

Santiago, diez de enero de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 3 de agosto de 2022, comparece don Omar Matus de la Parra Sardá, abogado, en representación de la Clínica Vespucio SpA., la que de conformidad a lo previsto en el artículo 113 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2005 del Ministerio de Salud, deduce recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta SS/N° 816, de 4 de julio de 2022, de la Superintendencia de Salud, en virtud del cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por ella, en contra de la Resolución Exenta IF/N° 783, de 30 de diciembre de 2021, de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, que le impuso una multa de 400 U.F.

Como aspecto previo, narra que con fecha 3 de diciembre de 2019, la Intendencia realizó una visita de fiscalización en las dependencias de dicho establecimiento de salud, por medio de la cual verificó el incumplimiento de la instrucción que había impartido la Superintendencia de Salud en relación a la obligación de informar, mediante el uso y llenado del “Formulario de Constancia de Información al Paciente GES” o el documento alternativo autorizado, a las personas beneficiarias de los derechos a las Garantías Explícitas en Salud.

Refiere, que en virtud de las circunstancias descritas, se le formularon cargos por dicha infracción y que, luego de la tramitación del procedimiento sancionatorio, se dictó la Resolución Exenta IF/N° 135, de 6 de marzo de 2020, que, tras analizar los descargos efectuados por esa parte y para efectos de determinar la sanción aplicable, consideró que los incumplimientos correspondían a 7 sobre una muestra de 19 casos revisados, resolviendo imponer una multa de 500 U.F.

Expone que, en contra de dicha resolución, se dedujo recurso de reposición con jerárquico en subsidio, solicitando que se dejara sin efecto la multa o en su defecto, fuera reducida al mínimo posible, según las normas establecidas al efecto, desechándose el recurso de reposición y acogándose parcialmente el recurso jerárquico por parte de la Superintendencia, respecto de la cuantía aplicada, la que ordenó devolver el expediente a la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud,



CKSPXDNBRSE

para que procediera determinar el monto de la multa a aplicar, expresando los motivos, razones y circunstancias del *quantum* y verificando la proporcionalidad de ésta con la gravedad y naturaleza de la infracción.

Agrega que, mediante Resolución Exenta IF/N°783 de 2021, la institución aludida estableció que la multa a imponer ascendía a 400 U.F., sin contener fundamentos suficientes que justificaran la fijación de dicho monto. Por ello en contra de dicha resolución, nuevamente se dedujo recurso de reposición con jerárquico en subsidio, los que fueron rechazados por las Resoluciones Exentas IF/N° 341, de 10 de mayo de 2022, de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud y SS/N° 816, de 4 de julio de 2022, de la Superintendencia de Salud, respectivamente.

Alega, que la resolución así reclamada infringe los artículos 41 de la Ley N° 19.880 y 112 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2005 del Ministerio de Salud, toda vez que no justifica de modo alguno el elevado monto de la multa impuesta, sin que baste al efecto que señale los hechos que tuvo en consideración para su aplicación, pues también debe indicar los fundamentos que le permiten determinar su monto o entidad, pues, de lo contrario, el ejercicio de la facultad fiscalizadora y sancionadora se vuelve del todo discrecional y arbitrario, afectando, en último término, los derechos del sujeto o entidad fiscalizada.

En efecto, y de acuerdo a lo ya mencionado, indica que la Resolución Exenta IF/N°783 no cumple con lo ordenando por la Superintendencia y vuelve a cometer la misma infracción estableciendo una multa sin expresar los motivos, razones y circunstancias consideradas al efecto, limitándose a consignar que la infracción es de carácter gravísimo y que las instrucciones reprochadas son de larga data. Asimismo, ponderó no aplicar la sanción más severa, en consideración que en la Resolución Exenta IF/N°135, se acogieron los descargos respecto de uno de los casos por los que se formuló cargos, señalando que, de los 19 casos que quedaron considerados, sólo en siete se incumplió la normativa. Aclara que, en realidad fueron 20 casos los considerados, no 19 como erradamente afirma, de lo cual se sigue que sí se cumplió en 13 casos, que equivalen a 65% de cumplimiento.



Luego, estima que al resultar establecido que se constató incumplimiento solo respecto de 30% de los casos fiscalizados, no resulta coherente que solamente se haya rebajado la multa en un 20% respecto del máximo que la ley permite aplicar.

Adiciona, que las resoluciones que resolvieron los recursos administrativos interpuestos en contra de dicha resolución se limitan a reiterar los argumentos contenidos en las resoluciones anteriores, sin explicar ni justificar la forma de determinación de la cuantía de la multa, con lo cual se transgrede el principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción impuesta y el criterio de graduación de las sanciones, los que presiden el ejercicio de las potestades sancionadoras de la administración, tornando en arbitrario el monto de la multa.

Concluye, solicitando que acoja el recurso de reclamación, declarando que se deje sin efecto la multa impuesta, con costas.

SEGUNDO: Que, contestando el traslado conferido respecto del presente recurso de reclamación, don Víctor Torres Jeldes, Superintendente de Salud, solicita su rechazo, con costas.

Luego de hacer una relación de los antecedentes del acto administrativo impugnado, precisa que la recurrente no rebate a la situación fáctica que motivó su dictación, por lo que el recurso sólo se fundamentó en el agravio que le causa la multa. En tal sentido, razona que la reclamante intenta exponer una pretendida ilegalidad o arbitrariedad de su parte, cuando en realidad su acción se basa en una disconformidad con lo resuelto, particularmente con el monto de la multa, lo que no es motivo suficiente para erigirse como fundamento de un recurso de reclamación, el que persigue dejar sin efecto una acto de un órgano de la administración del estado que ha sido dictado fuera del ámbito de su competencia o de manera caprichosa y sin fundamento, hipótesis que deben ser descartadas de plano en este caso.

Sostiene, en primer lugar, la inadmisibilidad del recurso, en cuanto la reclamante decide interponer recurso jerárquico en contra de la misma resolución, renunciando a su juicio al presente arbitrio.

Añade, que la Superintendencia no ha cometido ilegalidad ni arbitrariedad alguna, toda vez que ha actuado en el marco de sus



atribuciones, establecidas en los artículos 115 y 125 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2005 del Ministerio de Salud; 24 y 25 del Decreto Supremo N° 136 de 2005 del Ministerio de Salud y 29 de la Ley N° 19.966; así como en el Oficio Circular IF/N°60, de 2005 y en la Circular IF N° 57, de 2007, con los ajustes introducidos por las Circulares IF/N°142, de 2011; IF N° 194, de 2013 e , IF N° 2277, de 2014.

Aduce, que dicha decisión tampoco puede calificarse de arbitraria por cuanto se sustenta en la debida tramitación de un procedimiento administrativo, en el cual se ha dado cabal cumplimiento a los principios de impugnabilidad, imparcialidad y, particularmente, al de contradictoriedad, que al efecto establecen las leyes N°s.18.575 y 19.880.

Hace presente, asimismo, que todos los actos dictados en el proceso administrativo seguido ante esa entidad se encuentran debidamente fundamentados, basados precisamente en el mérito de las alegaciones ventiladas durante el transcurso del procedimiento, y en ningún caso corresponde a una decisión antojadiza o caprichosa de ese órgano fiscalizador.

Observa que la resolución recurrida, en su considerando séptimo, expresa sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho por los cuales se procedió a desestimar las alegaciones planteadas por la prestadora, los cuales no son sino consecuencia de las razones latamente expuestas tanto en la resolución exenta IF/N° 783, de 2021, que le impuso la multa, dando cuenta de las razones y motivaciones para el monto de la misma, así como en la resolución exenta IF/N° 341, de 2022, que rechazó el recurso de reposición del ahora reclamante, actos que expresan debidamente las razones o fundamentos de las decisiones adoptadas.

En relación a la proporcionalidad de la sanción impuesta, expone que esa Intendencia de Fondos consideró todas las circunstancias que rodearon el caso particular, estimando que el quantum de la multa aplicada, ascendente a 400 Unidades de Fomento, se condice plenamente con el principio enunciado.

Sostiene, que el artículo 125 inciso segundo del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, faculta a ese organismo de



control para sancionar a los establecimientos de salud privados en caso de incumplimiento de sus instrucciones o dictámenes con una multa de hasta 500 Unidades de Fomento. Por ello, y en la especie, se tomó en cuenta que, al momento de fiscalizar una acotada muestra de 20 casos, 7 de ellos, equivalentes al 35% del total, no contaban con las copias de los formularios de notificación, a lo que se suma que este tipo de incumplimiento no resulta una novedad en las fiscalizaciones efectuadas a ese prestador, conforme lo acreditan los procesos verificados desde el año 2009, tal como se expuso en las resoluciones recurridas. Además, precisa que para la determinación de dicho monto también se consideró que la infracción era de carácter gravísimo, puesto que afecta el derecho de las personas beneficiarias a las garantías explícitas en salud, las que no operan automáticamente, sino que requieren la realización de determinados trámites y el cumplimiento de ciertas condiciones, lo que supone que éstas sean informadas oportunamente del beneficio que les asiste, así como el hecho que las instrucciones incumplidas no son recientes.

TERCERO: Que, los actos administrativos están revestidos de la presunción de legalidad, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 3° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos del Estado, presunción de carácter legal que puede ser desvirtuada, siendo de carga de la reclamante acreditar la ilegalidad invocada.

En este sentido, el control que en esta sede se puede realizar, sólo se basa en la legalidad o no del acto reclamado, sin poder modificar lo resuelto en caso de que el acto impugnado se ajuste al derecho vigente.

CUARTO: Que, el artículo 113 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2005 del Ministerio de Salud, prescribe que: *“En contra de las resoluciones o instrucciones que dicte la Superintendencia podrá deducirse recurso de reposición ante esa misma autoridad, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de la notificación de la resolución o instrucción.*

La Superintendencia deberá pronunciarse sobre el recurso, en el plazo de cinco días hábiles, desde que se interponga.



En contra de la resolución que deniegue la reposición, el afectado podrá reclamar, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, ante la Corte de Apelaciones que corresponda, la que deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del reclamo y si éste ha sido interpuesto dentro del término legal. Admitido el reclamo, la Corte dará traslado por quince días hábiles a la Superintendencia. Evacuado el traslado, la Corte ordenará traer los autos "en relación", agregándose la causa en forma extraordinaria a la tabla del día siguiente, previo sorteo de Sala cuando corresponda. Si el tribunal no decretare medidas para mejor resolver, dictará sentencia dentro del plazo de treinta días, y si las ordenare, en el plazo de diez días de evacuadas ellas.

Para reclamar contra resoluciones que impongan multas, deberá consignarse, previamente, en la cuenta del tribunal, una cantidad igual al veinte por ciento del monto de dicha multa, que no podrá exceder de cinco unidades tributarias mensuales, conforme al valor de éstas a la fecha de la resolución reclamada, la que será aplicada en beneficio fiscal si se declara inadmisibile o se rechaza el recurso. En los demás casos, la consignación será equivalente a cinco unidades tributarias mensuales, vigentes a la fecha de la resolución reclamada, destinándose también a beneficio fiscal, en caso de inadmisibilidad o rechazo del recurso.

La resolución que expida la Corte de Apelaciones será apelable en el plazo de cinco días, recurso del que conocerá en cuenta una Sala de la Corte Suprema, sin esperar la comparecencia de las partes, salvo que estime traer los autos "en relación".

Las resoluciones de la Superintendencia constituirán títulos ejecutivos y les será aplicable lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.

La notificación de la interposición del recurso no suspende los efectos de lo ordenado por la Superintendencia, sin perjuicio de la facultad del tribunal para decretar una orden de no innovar. Las resoluciones que apliquen multa, cancelen o denieguen el registro de una Institución, solo deberán cumplirse una vez ejecutoriada la resolución respectiva.

El Superintendente podrá delegar para estos efectos la representación judicial de la Superintendencia, en conformidad al artículo



109, N° 4 de esta ley; en este caso los funcionarios en quienes haya recaído tal delegación, prestarán declaraciones ante los tribunales a que se refiere este artículo, mediante informes escritos, los que constituirán presunciones legales acerca de los hechos por ellos personalmente constatados, sin perjuicio de la facultad del tribunal de citarlos a declarar personalmente como medida para mejor resolver.

La Superintendencia estará exenta de la obligación de efectuar consignaciones judiciales”.

QUINTO: Que, se puede consignar que no existe controversia entre las partes sobre los hechos que constituyen la infracción, ni sobre la legalidad de la resolución que impone la sanción, limitándose la reclamante a denunciar una supuesta falta de fundamentación en la fijación del *quantum* de la multa, según se lee claramente de su arbitrio.

En este sentido, al revisar los fundamentos del acto reclamado, se puede apreciar que se reprocha que la reclamante en *“la Resolución Exenta IF/N°783 no cumple con lo ordenando por la Superintendencia y vuelve a cometer la misma infracción estableciendo una multa sin expresar los motivos, razones y circunstancias consideradas al efecto, limitándose a consignar que la infracción es de carácter gravísimo y que las instrucciones reprochadas son de larga data. Asimismo, ponderó no aplicar la sanción más severa, en consideración que en la Resolución Exenta IF/N°135, se acogieron los descargos respecto de uno de los casos por los que se formuló cargos, señalando que, de los 19 casos que quedaron considerados, sólo en siete se incumplió la normativa. Aclara que, aunque en realidad fueron 20 casos los considerados, no 19 como erradamente afirma, de lo cual se sigue que sí se cumplió en 13 casos, que equivalen a 65% de cumplimiento”.*

SEXTO: Que, es menester dejar establecido que de la lectura de la resolución recurrida resulta palmario que esta consta de los fundamentos de hecho y de derecho que la reclamante echa en falta, así se lee en los considerandos primero a sexto del acto impugnado.

Por otro lado, en relación a la proporcionalidad de la sanción impuesta, expone que esa Intendencia de Fondos consideró todas las circunstancias que rodearon el caso particular, entre las que se señalan,



que la infracción es de carácter gravísimo, que afecta los derechos de las personas beneficiadas con las Garantías Explicitas de Salud y que las instrucciones reprochadas son de larga data, razones que justifican suficientemente a juicio de esta Corte la aplicación de la sanción en el importe fijado.

Por último, el artículo 125 inciso segundo del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, faculta a la reclamada para sancionar a los establecimientos de salud privados en caso de incumplimiento de sus instrucciones o dictámenes con una multa de hasta 500 Unidades de Fomento, por lo que la sanción establecida se encuentra en el margen establecido en la ley.

SÉPTIMO: Que, en el caso de autos, el acto administrativo ha sido dictado por la autoridad competente, legalmente facultada para fiscalizar, investigar y sancionar a la recurrente, respetándose el procedimiento y las garantías de la misma, quien formuló alegaciones y defensas ante la autoridad, que fueron descartadas, según da cuenta el informe consignado en fundamento segundo de esta sentencia, en que se reproducen los fundamentos del rechazo de las alegaciones.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no existe acto ilegal que se pueda imputar a la recurrida, la que ha actuado en conformidad a las normas que la regulan, y dictando el acto administrativo fundado en un procedimiento legalmente tramitado.

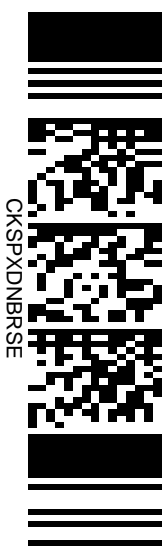
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 113 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2005 del Ministerio de Salud, **se rechaza** el recurso de reclamación deducido por Clínica Vespucio SpA, en contra de la Resolución Exenta SS/N° 816, de 4 de julio de 2022 de la Superintendencia de Salud, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Cristián Lepin Molina.

Contencioso Administrativo N° 372-2022.





CKSPXDNRSE

Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Antonio Ulloa M., Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Cristian Luis Lepin M. Santiago, diez de enero de dos mil veintitrés.

En Santiago, a diez de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

